



**Juzgado Segundo Civil del Circuito
Soacha – Cundinamarca**

Tipo de Proceso	Acción de Tutela		
Radicación del Proceso		257543103002 202200046	
Accionante	José Wilson Patiño Forero obran en nombre y representación de FINESA S.A.		
Accionado	Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca		
Derecho	Debido Proceso	Decisión	Improcedente
Soacha, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)			

Asunto a Tratar

Corresponde al Despacho resolver la solicitud de tutela impetrada por el señor **José Wilson Patiño Forero** obrando en nombre y representación de la empresa **Finesa S.A.** en contra del **Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca.**

Solicitud de Amparo

Obra escrito tutelar, donde el accionante plantea sus pretensiones.
<https://bit.ly/35Y5qI4>

Trámite

La presente acción de Tutela fue admitida mediante auto del ocho (08) de marzo de dos mil veintidós (2022), en el cual, se ordenó notificar a las partes para que ejercieran su derecho de defensa y terceros que hayan intervenido en el proceso, y se le reconoció personería al profesional en derecho **José Wilson Patiño Forero** obrando en nombre y representación de la empresa **Finesa S.A.**, para actuar en el presente proceso constitucional.

Informe rendido por el despacho accionado Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca.

El día diez (10) de marzo del año dos mil veintidós (2022), el despacho accionado, dio respuesta en sede de tutela, indicando entre otros, que el despacho no ha vulnerado garantías fundamentales del tutelante, dentro de las actuaciones desplegadas por la directora del despacho, indica que conforme al orden cronológico según la fecha de entrada y salida del expediente del despacho corresponde al tres (03) de marzo de la presente anualidad, el cual fue notificado en debida forma, por medio de estado fijado en cuatro (04) de marzo calendado, “*por consiguiente, a la fecha de interposición de la presente tutela este despacho ya se había pronunciado respecto al proceso objeto de la presente demanda, por lo que se podría predicar la inexistencia de los derechos invocados, pues la situación puesta en conocimiento no existía al momento de radicar la demanda tutelar y, por el contrario lo que se evidencia es que el accionante, dejó de lado sus obligaciones y prefirió acudir a la demanda constitucional sin verificar la publicación de los estados en el micro – sitio asignado a este despacho en la página web de la Rama Judicial*”. Además, manifiesta la titular del despacho accionado, que en la actualidad el despacho cuenta con mora en los trámites procesales conforme a los términos legales establecidos. Por último, solicita negar las pretensiones en la acción constitucional por la inexistencia de la vulneración alegada. <https://bit.ly/3wgV9Bk>

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202200046	
Soacha, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)	

Por su parte, el señor Alexander Velandia Beltrán parte pasiva en el proceso ordinario objeto de controversia, remite al despacho correos electrónicos el día catorce (14) y quince (15) de marzo de la presente anualidad, indicando y adosando al expediente digital los pagos que a generado a la parte actora del proceso ordinario, colocándose al día en su obligación con la empresa accionante. (<https://bit.ly/3Jkli65>) (<https://bit.ly/366SuiX>).

Fundamentos de la decisión

Problema Jurídico

Corresponde a este Despacho constitucional determinar si el actuar del **Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca**, transgrede presuntamente los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la celeridad y al desarrollo de la actividad económica teniendo en cuenta que, al no presentarse pronunciamiento alguno sobre la admisión de la demanda en el trámite de ejecución de garantía mobiliaria – pago directo de la empresa Finesa S.A. contra Alexander Velandia Beltrán, la cual correspondió por reparto al despacho accionado, situación que transgrede sus garantías constitucionales.

Del Debido Proceso

Respecto a este, es procedente la acción de tutela cuando se erige para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de hecho vulneren o amenacen tal derecho fundamental, de ahí, que los servidores públicos deban actuar conforme las funciones atribuidas por la constitución o por la ley. Es necesario precisar que al dirigirse el amparo contra providencia judicial, la jurisprudencia es diáfana y terminante al señalar que la acción de tutela, según lo consagrado en el art. 86 de la Constitución Política y lo decidido en sentencia C-543 de 1992, no procede contra sentencias y providencias judiciales, salvo la existencia de una vía de hecho que implique la violación o amenaza de derecho constitucional fundamental que pueda causar un perjuicio irremediable, según reitera en múltiples fallos.

Pruebas

Inspección Judicial

Para efectos de estudiar la presente acción constitucional se hizo estudio del Proceso Pago Directo con número de radicado n°.25754400300120210907. <https://bit.ly/3KXlQij>

Desarrollo

En reiterada jurisprudencia se ha sostenido, que la acción de tutela por su carácter residual, no puede constituirse en un mecanismo alterno o que sustituya otros medios de defensa ordinarios. Igualmente, y en principio se tiene que es improcedente contra decisiones judiciales, salvo que en ellas se incurra en las causales expresamente establecidas por la Jurisprudencia constitucional, cuando aquellas se apartan del ordenamiento legal, violando así derechos fundamentales de alguna persona.

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202200046	
Soacha, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)	

Es menester, establecer que la acción de tutela tiene por objeto proteger a las personas cuando sea evidente un perjuicio irremediable. Por lo anterior es pertinente, citar el precedente judicial de la H. Corte Constitucional conforme a la sentencia SU 184 de 2019:

“El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela y estableció expresamente que ella puede ser promovida para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Con base en este mandato, la jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente desde sus primeros pronunciamientos que la acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias emitidas por los jueces de la República.

Inicialmente, en la Sentencia C-547 de 1992, la Corte declaró la inexecutable de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaban la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. En esa oportunidad la Corte explicó que: (i) por regla general, el recurso de amparo no procedía contra providencias judiciales; (ii) la jurisdicción ordinaria era el escenario natural para resolver las controversias relativas a los derechos de los ciudadanos; (iii) las decisiones de los jueces estaban revestidas por el efecto de la cosa juzgada, que garantiza la seguridad jurídica como elemento esencial del Estado de Derecho; y (iv) que se debe respetar el principio la autonomía e independencia de los jueces. No obstante, en ese pronunciamiento se admitió que la tutela era procedente contra actuaciones u omisiones del juez, distintas a la providencia judicial o contra “vías de hecho judiciales”.

La evolución jurisprudencial en la materia, llevó a concluir a la Corte, que, no obstante, la relevancia constitucional de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica, el amparo constitucional podría proceder excepcionalmente cuando se reunieran un conjunto de estrictos requisitos contemplados en la propia jurisprudencia. A propósito de una discusión en la que se veían envueltos estos criterios, la Corte profirió la Sentencia C-590 de 2005, en la que estableció las causales de orden general y especial que debe examinar el juez para determinar si la acción de tutela procede como mecanismo de protección frente a la decisión adoptada por otra autoridad judicial. En particular, la Corte advirtió que la tutela procede únicamente cuando se verifica la concurrencia de la totalidad de los requisitos generales de procedencia, que se mencionan a continuación:

- (i) “Que la cuestión que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (...)*
- (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;(…)*
- (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;(…)*
- (iv) Que, tratándose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (...)*
- (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(…) y*
- (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (...).”*

Los anteriores requisitos generales de procedibilidad funcionan como parámetro de cumplimiento de intervención del juez constitucional. En ese sentido, la superación de los anteriores requisitos implica la aceptación de un estudio específico de los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por tanto, si no se cumplen con ninguno de los anteriores, el juez constitucional no podrá continuar con un examen de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales y, como consecuencia de ello, deberá declarar la improcedencia de la acción de tutela”. (Sentencia SU 184/2019, 2019)

Acorde a lo anterior, resulta viable hablar de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y, en consecuencia, es posible, a través de la acción de tutela, la protección de los derechos fundamentales, cumpliendo los requisitos generales de procedencia.

En atención a los postulados trascritos, se tiene que el asunto reviste de relevancia constitucional, pues con las resultas del fallo presuntamente se verían afectados derechos supra.

Sin embargo, debe advertirse que la presente acción no es una tercera instancia, por lo que a través de ella no puede controvertirse aspectos que no fueron puestos de presente en el proceso judicial, o de suyo, pretermitir etapas procesales ya agotadas.

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202200046	
Soacha, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)	

Por su parte, a lo indicado por el H. Corte Constitucional, al verificar la concurrencia de la totalidad de los requisitos de procedencia de la acción constitucional de tutela en contra de providencia judicial, la verificación del principio de inmediatez debe ser más estricto.

A lo anterior, el principio de inmediatez, se debe tener en cuenta la exigencia de un término razonable entre la vulneración del derecho fundamental del peticionario y la presentación de la tutela, evitando el uso de este mecanismo constitucional como herramienta, es así que, la acción de tutela procede “*dentro de un término razonable y proporcionado*”, contando a partir del momento en el que se produce la violación del derecho. En este sentido, la inmediatez con la que debe ejercerse la acción es un factor determinante para su procedencia, pues su objeto y finalidad tiene relación directa con la necesidad de proteger de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales de las personas, cuyo amparo, por su propia naturaleza, no puede aplazarse en el tiempo.

En el presente caso, se tiene que la actuación que se reclama como violatoria, a voces del tutelante **José Wilson Patiño Forero** obrando en nombre y representación de la empresa **Finesa S.A.**, devienen de la falta de pronunciamiento por parte del despacho accionado, en cuento a la falta de pronunciamiento del auto admisorio dentro del proceso ordinario ejecución de garantía mobiliario – pago directo, y los diferentes memoriales remitidos al despacho accionado. Vislumbra este Despacho Constitucional que se cumple con el principio de inmediatez.

Caso Concreto

De antaño, la Corte Constitucional ha previsto que, partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5° y 6° del Decreto 2591/1991, se deduce que la acción u omisión cometida que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico - jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales.

Superado el examen preliminar, corresponde entonces analizar la solicitud en sede de tutela, que se concreta en que, por medio del instrumento constitucional de tutela, que se amparen los derechos fundamentales que conduele como transgredidos y se ordene al despacho accionada **Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca**, a voces del accionante “*fijar auto de admisión correspondiente de forma inmediata, esto con el fin que no se siga con la señalada dilación injustificada la cual evidentemente vulnera los derechos al debido proceso y celeridad en las actuaciones judiciales que está poniendo en riesgo inminente los derechos económicos, patrimoniales y el desarrollo empresarial de mi poderdante y de la demanda, pudiendo ocasionar un perjuicio irremediable para la misma.*”

Observa esta Juzgadora que dentro del trámite procesal del instrumento constitucional el despacho accionado profirió providencia judicial con fecha del tres (03) de marzo de la presente anualidad, la cual fue debidamente notificada por medio de estado n° 0007 fijado el día cuatro (04) de marzo de dos mil veintidós (2022)(<https://bit.ly/35KDZBd>), decisión que dispuso **inadmitir** la anterior la demanda presentada en el

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202200046	
Soacha, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)	

proceso objeto de controversia y para que en el término de cinco (5) días se subsane so pena de rechazo.

Así las cosas, este Despacho Constitucional, observa que el despacho accionado **Juzgado Primero (01) Civil Municipal de Soacha – Cundinamarca**, resolvió de fondo los pedimentos solicitados por el tutelante dentro del proceso ordinario objeto de controversia, por lo anterior no se estaría ante la vulneración de ningún derecho fundamental; por ende, los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela han sido superados por el despacho accionada, al dar respuesta de fondo con la contestación del presente instrumento constitucional y el que se pone de presente al accionante, con el presente fallo.

Al encontrarnos ante un hecho superado, este instrumento constitucional de defensa ha perdido su objetivo y en consecuencia resultaría ineficaz, en razón a que el motivo de reclamación ha sido resuelto y no habría lugar a ordena la ejecución de un hecho que ya se sucedió. Entonces la orden que pudiera impartir el Juez de Tutela no tendría ningún efecto en cuanto a la efectividad del derecho presuntamente vulnerado.

En conclusión, la situación de hecho que dio origen a la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.

Aunado a lo anterior, la H. Corte Constitucional determino frente a la carencia de objeto por hecho superado, en la Sentencia T 038 – 2019 que:

“La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o simplemente “caería en el vacío”. Específicamente, esta figura se materializa a través en las siguientes circunstancias:

Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.” (Sentencia T-038/19, 2019)

Siendo estos los argumentos para declarar improcedente la acción constitucional solicitada por la parte accionante en sede de tutela.

En mérito de lo expuesto, este juzgado en instancia de juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la ley.

Resuelve

Primero: Declarar Improcedente el amparo solicitado por el accionante **José Wilson Patiño Forero** identificado con C.C. 91.075.621 de San Gil - Santander, quien obra en representación de la empresa **Finesa S.A.**, de conformidad con la aparte considerativa del presente fallo.

Asunto	Acción de Tutela
257543103002 202200046	
Soacha, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)	

Segundo: Notifíquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

Tercero: De no ser impugnada esta decisión remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase



Paula Andrea Giraldo Hernández
Juez

Firmado Por:

Paula Andrea Giraldo Hernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a4bfdc0176ff04d185ba622c103f54bd48f875ecdbea605d11c4bc8ebf51d423**

Documento generado en 17/03/2022 01:51:30 PM

Descargue el archivo y valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



República de Colombia

Juzgado Segundo Civil del Circuito - Soacha Cundinamarca